



*Documentos de Trabajo del Departamento de
Derecho Mercantil*

2015/94

Septiembre 2015

**PODER DE REPRESENTACIÓN Y OPERACIONES CON
ACTIVOS ESENCIALES EN LA LEY DE SOCIEDADES DE
CAPITAL**

Javier Megías López

Departamento de Derecho Mercantil, Facultad de Derecho
Universidad Complutense
Ciudad Universitaria s/n
28040 Madrid
0034 91 394 5493
E-mail autor: jmegias@ucm.es
<https://www.ucm.es/dep-derecho-mercantil>

Documento depositado en el archivo institucional EPrints Complutense
<http://www.ucm.es/eprints>
Copyright © 2015 por el autor

PODER DE REPRESENTACIÓN Y OPERACIONES CON ACTIVOS ESENCIALES EN LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL*

JAVIER MEGÍAS LÓPEZ

Profesor Titular interino

Departamento de Derecho Mercantil

Universidad Complutense de Madrid

Resumen: El presente trabajo examina la incidencia en el poder de representación de los administradores de la nueva competencia legal de la junta general de sociedades de capital para realizar operaciones que impliquen activos esenciales, introducida en la Ley de Sociedades de Capital por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre.

Palabras clave: activos esenciales, poder de representación, junta general, órgano de administración

Abstract: This paper analyzes the implications of the new norms regarding the need of shareholders approval of businesses involving essential assets in representation of the corporation by directors, introduced in the Companies Act by the reform of December 2014.

Key words: essential assets, power of representation, shareholders, directors

* El presente texto actualiza la intervención presentada en la mesa redonda “The Function and Operation of the General Meeting: Old and New Problems” del XII Seminario Harvard-Complutense de Derecho Mercantil, celebrado los días 6, 7 y 8 de octubre de 2014 en la Harvard Law School, con el patrocinio de Banco Santander, Ilustre Colegio Notarial de Madrid y Telefónica.

SUMARIO:

I. INTRODUCCIÓN

II. LA NUEVA COMPETENCIA DE LA JUNTA GENERAL SOBRE OPERACIONES CON ACTIVOS ESENCIALES

III. INCIDENCIA EN EL PODER DE REPRESENTACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES

A. Punto de partida: el poder de representación y la atribución voluntaria de competencia a la junta general en materia de gestión

B. El poder de representación en operaciones con activos esenciales

I. INTRODUCCIÓN

La Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo¹, ha introducido alteraciones en el esquema de competencias orgánicas de las sociedades de capital a través de la concesión de un protagonismo mayor en asuntos de gestión a la junta general, sin hacer distinción tipológica entre sociedad anónima y sociedad de responsabilidad ni diferenciar estructuralmente sociedades abiertas y cerradas. La Ley organiza esa posibilidad de intervención por el órgano de socios en la esfera de competencias tradicional del órgano de administración de dos maneras. Por una parte, como tendremos ocasión de ver en concreto, atribuye a la junta general la competencia exclusiva para decidir sobre la disposición o adquisición de activos esenciales, decisión que consecuentemente desaparece de la facultad y competencia del órgano de administración; además, con alcance similar pero exclusivamente para sociedades cotizadas,

¹ BOE núm. 293, de 4 de diciembre de 2014.

amplia igualmente la competencia de la junta para decidir sobre la transferencia a entidades dependientes de actividades esenciales de la sociedad². Por otra parte, se reconoce para todas las sociedades de capital la facultad de la junta general de intervenir en asuntos de gestión por iniciativa propia, quedando de este modo una suerte de competencia concurrente entre ambos órganos, y así se suprime la diferencia histórica entre sociedades de responsabilidad limitada y sociedades anónimas³.

El objeto de las páginas que siguen es realizar una aproximación a la primera de las citadas modificaciones, que atribuye a la junta general la competencia legal para que la sociedad concluya ciertas operaciones que impliquen activos esenciales, desde la perspectiva de la relevancia que ello tiene en los actos del órgano de administración frente a terceros. En concreto, se aborda la influencia de esa nueva competencia de la junta en el poder de representación del órgano de administración en relación con excesos de competencia por éstos vulnerando la nueva atribución legal a la junta.

II. LA NUEVA COMPETENCIA DE LA JUNTA GENERAL SOBRE OPERACIONES CON ACTIVOS ESENCIALES

La reforma operada sobre la LSC por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, introduce una nueva competencia de la junta general, a quien atribuye «la adquisición, la enajenación o la aportación a otra sociedad de activos esenciales», añadiendo a continuación que «se presume el carácter esencial del activo cuando el importe de la operación supere el veinticinco por ciento del valor de los activos que figuren en el último balance aprobado»⁴. Igualmente se ha previsto una competencia adicional para la junta general de las sociedades cotizadas que guarda estrecha similitud: «la transferencia a

² *Vid. infra* notas 4 y 5 y texto que acompañan.

³ El art. 161 LSC sobre «Intervención de la junta general en asuntos de gestión» señala que «Salvo disposición contraria de los estatutos, la junta general de las sociedades de capital podrá impartir instrucciones al órgano de administración o someter a su autorización la adopción por dicho órgano de decisiones o acuerdos sobre determinados asuntos de gestión, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 234».

⁴ Art. 160.f) LSC, en su nueva redacción.

entidades dependientes de actividades esenciales desarrolladas hasta ese momento por la propia sociedad, aunque esta mantenga el pleno dominio de aquellas»; añadiendo que «se presumirá el carácter esencial de las actividades y de los activos operativos cuando el volumen de la operación supere el veinticinco por ciento del total de activos del balance»⁵. Las consecuencias de una competencia y otra son las mismas a los efectos del análisis que sigue sobre las implicaciones en el poder de representación.

El legislador de la reforma pretende evitar que el órgano de administración decida sobre ciertas operaciones que pudieran entenderse como de gestión, o cuando menos neutras pero incorporadas en el ámbito de su poder de representación, y sin embargo se trata de decisiones de una relevancia vital para la sociedad y potencialmente con destacada incidencia en el interés de los socios⁶. Se trata de operaciones de gestión extraordinaria en las que tradicionalmente se ha discutido si la competencia corresponde a los administradores o al órgano de socios, y cuya solución ha sido problemática⁷. La conclusión de la doctrina que ha tratado el tema es que la

⁵ Art. 511 bis.1.a) y 2 LSC. Naturalmente debe entenderse que las operaciones a que se refiere esta disposición son distintas de las referidas por el art. 160.f) LSC, si bien, por demasiadas cuestiones derivadas principalmente de una incoherencia en el proceso de incorporación de las normas a la Ley no queda claro el tipo de operaciones a que se refiere, ni la especialidad que parece pretender la norma; y desde luego no se encuentra justificación para entender que este tipo de operaciones, sean las que sean, deban ser competencia adicional de la junta general en cotizadas, y no se extienda también la competencia sobre ellas a la junta de las demás sociedades de capital. Siguiendo la rec. 3 del Código Unificado de Buen Gobierno de 2006 –*vid. infra* nota 9 y texto que acompaña–, el Estudio sobre propuestas de modificaciones normativas presentado el 14 de octubre de 2013 por la Comisión de Expertos en materia de Gobierno Corporativo, sugirió únicamente la atribución de la competencia de la junta sobre la disposición de activos esenciales en sociedades cotizadas, con la correspondiente acogida por el Anteproyecto de Ley X/2014 (sic), por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, al que se dio publicidad a finales de diciembre de 2013. El Proyecto de Ley de 30 de mayo de 2014, introdujo la competencia de la junta sobre la disposición y adquisición de activos esenciales para todas las sociedades de capital en el citado art. 160.f) LSC, pero mantuvo la previsión “especial” para sociedades cotizadas –art. 511 bis–, con una redacción diversa que carece de buena justificación.

⁶ Sobre el alcance del poder de representación, *vid. infra* nota 17 y texto que acompaña.

⁷ ALONSO LEDESMA, C., «El papel de la Junta General en el gobierno corporativo de las sociedades de capital», en ESTEBAN VELASCO, G., (coord.), *El gobierno de las sociedades cotizadas*, Madrid, Marcial Pons, 1999, pág. 638. *Vid.* también BOQUERA MATARREDONDA, J., *La Junta General de las Sociedades de Capital*, Cizur Menor, Aranzadi, 2008, págs. 56 y ss., aludiendo a los límites de una eventual configuración estatutaria sobre esa administración extraordinaria. En síntesis, si se entiende que la competencia de los administradores es la gestión y representación de la sociedad en sentido amplio –ya era así en el silencio de la Ley de sociedades anónimas de 1989 y la Ley de sociedades de responsabilidad limitada de 1995, es decir, antes de su

atribución de competencia al órgano de socios estará justificada cuando la operación sea de relevancia tal que pueda razonablemente comprometer su interés o posición jurídica, y como consecuencia su interés económico incorporado a esa posición; y más concretamente, se dice que cuando la operación conlleve una alteración estructural de la empresa social que se asemeje en efectos y consecuencias a una modificación estructural la competencia recaerá en la junta: tiene la competencia implícita sobre ella, debiendo los administradores someter la materia a su decisión⁸. Ya el Código Unificado de Gobierno Corporativo de 2006 alcanzaba una conclusión equivalente e introducía una recomendación de someter a la junta las operaciones de este tipo, concretamente la filialización a través de aportación de ramas de actividad, la disposición (de otro tipo) de activos esenciales, o cualquier operación con efectos equivalentes a los de la liquidación de la sociedad⁹. La propia Ley 31/2014 reconoce expresamente

reconocimiento legal expreso por el art. 209 LSC–, en dicha competencia se comprenden tanto los actos de gestión ordinaria como los de gestión extraordinaria, no importando en principio la significación económica. La cuestión permanecía abierta, por tanto, para aquellas operaciones que pudieran afectar a la posición jurídica de los socios por tener un componente estructural, con independencia de su relevancia económica.

⁸ ALONSO LEDESMA, *op. cit.*, págs. 640 y ss.; FERNÁNDEZ TORRES, I., «La reactivación de la Junta General en el Código Unificado de Gobierno Corporativo: aproximación a las competencias implícitas», en *EPrints Complutense*, núm. 11, 2007, págs. 14 y ss., subrayando la influencia del Derecho alemán, en concreto después de la sentencia *Holzmüller* del BGH (25 febrero 1982), que interpreta ampliamente el art. 119.2 de la *AktG*: «la junta general sólo podrá decidir sobre asuntos de gestión cuando la Dirección así lo requiera». ESTEBAN VELASCO, G., comentario al «Artículo 161. Intervención de la junta general en asuntos de gestión», en ROJO, A., y BELTRÁN, E. (coords.), *Comentario de la ley de sociedades de capital*, Madrid, Civitas–Thomson Reuters, 2011, págs. 1213–1214. En la jurisprudencia española, *vid.* las SSTs de 8 de febrero de 2007, o de 17 de abril de 2008.

⁹ El comentario previo de la rec. 3 del Código Unificado de Gobierno Corporativo reconocía que, además de las modificaciones estructurales, «existen, sin embargo, otras operaciones societarias que producen efectos similares y que, sin embargo, en ocasiones son adoptadas por el Consejo de Administración, al no existir una atribución legal específica y formal de competencia a favor de la Junta General. (...) Por ello, el Código estima que en estos casos y, en general, en todas las modificaciones estructurales de la sociedad, la decisión ha de corresponder a la Junta General de accionistas». Consecuentemente, la rec. 3 recomendaba aprobación por la junta general de «a) La transformación de sociedades cotizadas en compañías holding, mediante “filialización” o incorporación a entidades dependientes de actividades esenciales desarrolladas hasta ese momento por la propia sociedad, incluso aunque ésta mantenga el pleno dominio de aquéllas; b) La adquisición o enajenación de activos operativos esenciales, cuando entrañe una modificación efectiva del objeto social; c) Las operaciones cuyo efecto sea equivalente al de la liquidación de la sociedad». Al respecto, entendiendo que la idea detrás de esta recomendación era reconducir la operación de aportación de rama de actividad a la competencia de la junta general, RODRÍGUEZ ARTIGAS, F., «Junta General y derechos del accionista», en *RdS*, núm. 27, 2006, págs. 36–37. Antes, el Informe Aldama de 2003 apuntaba que «es recomendable que cada sociedad regule la necesidad o no de elevar a la

en su Exposición de Motivos la asunción de esa postura en la incorporación de la competencia citada, aludiendo a la semejanza con las modificaciones estructurales¹⁰.

De las referencias citadas se desprende que dicha postura tenía mucho sentido en relación a la aportación de rama de actividad como operación orientada sobre todo a la creación y promoción de grupos de sociedades, por su similitud con la escisión parcial, incluso todavía con riesgo más elevado (según los casos) de incidir en mayor medida en los intereses de los socios al no percibir éstos (directamente) porción de interés (jurídico y económico) en la sociedad beneficiaria¹¹. Pero desde la aprobación de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, la aportación de rama de actividad es considerada una modalidad de escisión, en concreto una segregación, y por tanto sometida al régimen especial previsto en dicha Ley para tales operaciones y orientado a tutelar los diferentes intereses en juego, que en lo que ahora nos interesa requiere aprobación por la junta general¹².

La actual atribución expresa por la LSC de esta nueva materia a la competencia a la junta general, como cabría esperar, no se refiere a las segregaciones o aportaciones de unidades económicas de la empresa, en

Junta General algunas decisiones de negocio, debidamente delimitadas, que sean trascendentales para el futuro de la sociedad y los intereses de accionistas e inversores», apartado IV.1.3.

¹⁰ Así lo expresa la Exposición de Motivos, apartado IV: «Asimismo, se amplían las competencias de la junta general en las sociedades para reservar a su aprobación aquellas operaciones societarias que por su relevancia tienen efectos similares a las modificaciones estructurales».

¹¹ Ya la jurisprudencia se inclinaba por atribuir competencia a la junta general para decidir sobre la transmisión patrimonial de unidades económicas de la sociedad a otras entidades, incluso apuntando que su realización por los administradores supone una extralimitación en el ámbito de su poder de representación, al ir más allá del objeto social estatutario, *vid.* la citada STS de 8 de febrero de 2007.

¹² Véanse los arts. 68 y ss. de la Ley de Modificaciones Estructurales de 2009. Al concepto de segregación se refiere el art. 71 de dicha Ley. La necesidad de su aprobación por la junta deriva de la aplicación a las modalidades de escisión del régimen de la fusión para lo no contemplado específicamente para ellas según el art. 73.1, del que resultaría de aplicación el art. 40. De hecho el propio art. 160 LSC prevé esa competencia de la junta, en la letra g). Sobre la inclusión de la aportación de rama de actividad en la segregación como modalidad de escisión, RODRÍGUEZ ARTIGAS, F., «Escisión parcial, segregación y aportación de rama de actividad», en *Anales de la Academia Matritense del Notariado*, núm. 50, 2010, *passim*. En contra, ÁLVAREZ ROYO-VILLANOVA, S., «La aportación de rama de actividad tras la regulación de la segregación en la Ley 3/2009 de Modificaciones Estructurales», en *Diario La Ley*, núm. 7253, 1 octubre 2009.

definitiva a la aportación de rama de actividad, cuestión ya resuelta por la Ley de Modificaciones Estructurales en cuanto al régimen aplicable y (adicionalmente) por la propia LSC en relación a la competencia de la junta general. Tampoco atribuye expresamente una competencia general y abierta al órgano de socios sobre las operaciones de gestión extraordinaria que guarden similitud de efectos con las modificaciones estructurales, a pesar de la referida afirmación de la Exposición de Motivos. La redacción de la nueva competencia de la junta general es más concreta, ampliando *ex lege* el ámbito objetivo de actuación del órgano supremo en el reparto interorgánico de competencias, pues atribuye competencia a la junta para la disposición de activos de singular relevancia para la sociedad, formen o no una unidad económica, y ya sea como aportación a otra sociedad o bien su simple enajenación, añadiendo además la competencia para la adquisición de activos que igualmente se consideren significativos¹³. Detrás de este reconocimiento está sin duda la idea de que tales adquisiciones o disposiciones significativas de activos pueden repercutir destacablemente en el interés jurídico y económico de los socios, justificando entonces su pronunciamiento informado al respecto a través de la junta. Pero por otra parte, al contrario que la aportación de unidades económicas, la nueva competencia entiende que no es necesario someter aquellas operaciones –particularmente la aportación de activos– al régimen completo de las modificaciones estructurales, pues ciertamente la incidencia en la posición de los socios es menor.

Por lo demás, se introduce en la norma un parámetro objetivo que permite la determinación de cuándo la operación será suficientemente relevante para la sociedad y ese interés de los socios y por tanto para atribuir la competencia sobre la misma a la junta general. Así, califica de activos esenciales cuya adquisición, enajenación o aportación a otra sociedad debe venir precedida de un acuerdo de la junta aquellos que superen el veinticinco

¹³ Para un análisis sobre el tipo de operaciones o negocios jurídicos a los que se refiere la norma, FERNÁNDEZ DEL POZO, L., «Aproximación a la categoría de “operaciones sobre activos esenciales”, cuya decisión es competencia exclusiva de la Junta [arts. 160 f) y 511 bis LSC]», en *La Ley Mercantil*, núm. 11 (febrero), 2015, págs. 3 y ss.; ÁLVAREZ ROYO-VILLANOVA, S., y SÁNCHEZ SANTIAGO, J., «La nueva competencia de la junta general sobre activos esenciales: a vueltas con el artículo 160 f) LSC», en *Diario La Ley*, núm. 8546, 25 mayo 2015, págs. 5 y ss.

por ciento de valor de los activos sociales en el último balance aprobado. La cuantificación de qué constituye un “activo esencial” a estos efectos debe entenderse como una presunción *iuris tantum*, que permite valorar en cada caso si la incidencia de la operación en el interés jurídico y económico de los socios requiere la aprobación por la junta general. Y desde luego, a la luz de la redacción de la nueva competencia, y manteniendo el planteamiento original del que trae causa, podrían existir activos esenciales aunque no alcancen ese porcentaje, cuya adquisición o disposición debería ser aprobada por la junta general por tratarse de operaciones susceptibles de afectar destacadamente ese interés de los socios¹⁴. Naturalmente, esa valoración abierta será fuente de problemas en el reparto interorgánico de la competencia, por la dificultad de delimitar cualitativamente el carácter esencial del activo¹⁵. A pesar de este eventual inconveniente, la previsión de un criterio objetivo para realizar la valoración sobre el carácter esencial del

¹⁴ El Estudio sobre propuestas de modificaciones normativas presentado el 14 de octubre de 2013 por la Comisión de Expertos en materia de Gobierno Corporativo dejó clara la intención de que la incorporación de la competencia de la junta general sea sobre «transacciones de especial significación cualitativa y cuantitativa», pág. 14. Piénsese en la disposición de bienes especialmente afectos al desarrollo del objeto social, que de hecho excedería el ámbito del poder de representación de los administradores, y por ello no sólo no es competencia suya, sino que tales actos de disposición podrían no obligar a la sociedad frente a terceros, salvo que fueran de buena fe o sin culpa grave *ex art.* 234 LSC; debe recordarse en este punto que la LSC prevé causas de disolución directamente relacionadas con la inactividad de la sociedad en relación a su objeto social o la imposibilidad de realizarlo, *art.* 363 LSC. Véase la RDGRN 25 abril 1997, que reproducimos parcialmente *infra* nota 17. En referencia a la calificación como esencial del activo y al carácter *iuris tantum* de la presunción, argumento *ex art.* 385.3 LEC, ALFARO ÁGUILA-REAL, J., «Competencias de la Junta e instrucciones a los administradores (II)», entrada de su blog con fecha 18 junio 2014, disponible en <http://derechomercantiles.ana.blogspot.com.es/> (con acceso el 10/09/2015), señalando que puede haber activos esenciales a estos efectos que no alcancen ese valor porcentual sobre el total de activos (ej., una patente importante para el desarrollo de la actividad), mientras que según los casos otros deberían entenderse comprendidos en el poder de representación de los administradores (ej., una sociedad que se dedica a la compraventa de inmuebles, y se compran o venden por valor superior a ese veinticinco por ciento). Con la misma idea MARÍN DE LA BÁRCENA GARCIMARTÍN, F., «Nuevas competencias expresas de la junta general de las sociedades de capital», en AA.VV., *Las reformas del régimen de sociedades de capital según la Ley 31/2014*, Gómez-Acebo & Pombo. Gestión del Conocimiento, 2015, pág. 47; y RECALDE CASTELLS, A., comentario al «Artículo 160. Competencia de la junta», en JUSTE MENCÍA, J. (coord.), *Comentario a la reforma del régimen de las sociedades de capital en materia de gobierno corporativo (Ley 31/2014). Sociedades no cotizadas*, Cizur Menor, Aranzadi, 2015, págs. 41-43. *Vid.* también sobre su condición *iuris tantum* y la aplicación en tal sentido, CABANAS TREJO, R., «Activos esenciales y competencia de la junta general de las sociedades de capital ¿un riesgo para el tercero que contrata con la sociedad?», en *Diario La Ley*, núm. 8521, 17 abril 2015, págs. 5 y ss.; y ÁLVAREZ ROYO-VILLANOVA y SÁNCHEZ SANTIAGO, *op. cit.*, págs. 13 y ss.

¹⁵ Véase los problemas en la valoración del activo que apunta CABANAS TREJO, *op. cit.*, págs. 9 y ss.

activo debe estimarse positiva, pues aunque admita prueba en contrario favorece la seguridad jurídica al menos en las relaciones internas; no tanto en las externas, como veremos a continuación¹⁶.

III. INCIDENCIA EN EL PODER DE REPRESENTACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES

A. Punto de partida: el poder de representación y la atribución voluntaria de competencia a la junta general en materia de gestión

Como es sabido, el ámbito del poder de representación de los administradores alcanza a los actos comprendidos en el objeto social, sean de ejecución directa o indirecta de ese objeto, y con independencia de si son actos de gestión ordinaria o extraordinaria, además de a los actos complementarios, instrumentales o auxiliares que guarden coherencia con el objeto social, y los actos neutros o polivalentes siempre que funcionalmente puedan vincularse con la promoción del objeto social a pesar de parecer en principio desconectados. No pueden considerarse incluidos en el ámbito del poder de representación los actos que clara e inequívocamente son contrarios o ajenos al objeto social por carecer de una relación instrumental con la actividad empresarial comprendida en el objeto social estatutario. Y en fin, entiende la Ley que la sociedad queda vinculada frente a terceros de buena fe y sin culpa grave por actos que excedan el objeto social¹⁷.

¹⁶ FERNÁNDEZ DEL POZO, *op. cit.*, pág. 6, señala «(...) la determinación cuantitativa u “objetiva” del “umbral legal operativo” para que entre en funcionamiento la presunción iuris tantum del carácter esencial de la operación (25 % del valor de los activos) no solo sirve, y acaso mal, a dar la “necesaria seguridad jurídica” al intérprete sino que, antes de nada, despliega una función propedéutica: nos da una pista sobre el criterio de ponderación empleado por el legislador». Y añade más adelante: «Con buen criterio, los expertos de la reforma desconfían de la labor jurisprudencial en la fijación de criterios cuantitativos orientativos» –pág. 27–.

¹⁷ Art. 234 LSC. *Vid.* GIRÓN TENA, J., *Derecho de sociedades anónimas (según la Ley de 17 de julio de 1951)*, Valladolid, Publicaciones de los Seminarios de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid, 1952, págs. 359 y ss.; ESTEBAN ESTEBAN VELASCO, G., comentario al «Artículo 234. Ámbito del poder de representación», en ROJO, A., y BELTRÁN, E. (coords.), *Comentario de la ley de sociedades de capital*, Madrid, Civitas-Thomson Reuters, 2011, págs. 1686–1688. *Vid.* además, entre otras muchas, las RRDGRN 11 noviembre de 1991; 22 y 26 junio 1992, 3 octubre 1994, 25 abril 1997, 17 noviembre

La atribución voluntaria de competencia de gestión a la junta general no altera en lo sustancial el ámbito del poder de representación proclamado por la Ley.

La junta general de las sociedades de capital tiene tres vías para intervenir en asuntos de gestión, competencia tradicional del órgano de administración. En primer lugar, a través de una previsión estatutaria exigiendo la intervención de la junta general para decidir sobre determinados asuntos de gestión. En segundo lugar, con el sometimiento por iniciativa de los propios administradores a la junta de alguna cuestión competencia de aquéllos, en términos de consulta. En tercer lugar, por medio de la iniciativa de la propia junta general reclamando competencia en específicas materias de gestión, sin previa disposición estatutaria habilitante y salvo que los estatutos nieguen esa posibilidad, requiriendo al órgano administrativo la observancia de las concretas instrucciones impartidas por la junta, o bien el sometimiento de determinadas decisiones a la autorización de la junta con carácter previo a su ejecución¹⁸. A través de cualquiera de estas posibilidades

1998, 10 mayo 1999, 20 abril 2005, 15 octubre 2005, 16 marzo 2009, 12 febrero 2012. Por su interés, nos parece oportuno reproducir parte de la citada RDGRN 25 abril 1997: «Es doctrina reiterada de este Centro Directivo que la delimitación del objeto social define el contenido mínimo, pero también el máximo, del ámbito de las facultades representativas del órgano gestor (...), y que, aun cuando es cierta la dificultad de determinar a priori si un acto concreto trasciende o no a ese ámbito, en todo caso quedan excluidas aquellas actuaciones claramente contrarias al objeto social, esto es, las contradictorias o denegatorias del mismo. En el caso debatido, el objeto social de la entidad no se define mediante la especificación de un concreto sector de la actividad económico-social, sino que está constituido por la explotación, en forma societaria, de unos concretos y significados bienes aportados al haber social, de modo que su permanencia en el mismo aparece no solo como condición “sine qua non” para la viabilidad del propio objeto social, sino como elemento básico y determinante del contrato social y de la subsistencia misma del nuevo ente constituido (...). Es evidente, pues, que cualquier actuación que implique de presente –o pueda implicar en lo sucesivo– la salida de esos bienes del patrimonio social excede inequívocamente de las facultades representativas del órgano gestor, entrando en la esfera competencial del órgano soberano de la sociedad, la Junta general (...)».

¹⁸ Ya era admitida la competencia de la junta general en asuntos de gestión bajo la vigencia de la Ley de sociedades anónimas de 1951, en ausencia de disposición en contrario, por GIRÓN TENA, *Derecho...*, *op. cit.*, pág. 284; GARRIGUES, J., y URÍA, R., *Comentario a la ley de sociedades anónimas*, Tomo I, Madrid, Samarán, 1953, págs. 501–503; y ESTEBAN VELASCO, G., *El poder de decisión en las sociedades anónimas: derecho europeo y reforma del derecho español*, Madrid, 1982, págs. 504–507, que añadía la posibilidad de que la junta general impartiera instrucciones al órgano de administración, pág. 505. Más reciente, SÁNCHEZ CALERO, F., *Los administradores en las sociedades de capital*, 2ª ed., Cizur Menor, Thomson–Civitas, 2007, págs. 47–48; ALONSO LEDESMA, «El papel de la Junta General...», *op. cit.*, págs. 638–639; ESTEBAN VELASCO, G., comentario al «Artículo 161. Intervención de la junta general en asuntos de gestión», en ROJO y BELTRÁN (coords.), *op. cit.*, págs. 1210–1213; BOQUERA MATARREDONDA, J., y LATORRE

de intervención de la junta en asuntos de gestión –previsión estatutaria, sumisión por los administradores, asunción por la junta– la voluntad social puede alterar la distribución de competencia predispuesta por la Ley en lo referido al ejercicio de la gestión, introduciendo limitaciones voluntarias, sean estatutarias u orgánicas, a la competencia de gestión del órgano de administración.

La opción de la Ley es que la intervención de la junta general en asuntos de gestión por cualquiera de las vías aludidas tenga únicamente efectos internos, manteniendo así en buena medida la autonomía del órgano de administración en el ejercicio de sus funciones de gestión y sobre todo de representación¹⁹. Tanto es así que la propia LSC declara expresamente que la intervención de la junta general en materia de gestión a través de su iniciativa de asunción de competencia –impartición de instrucciones en sentido amplio– se entiende sin perjuicio del amplio e inderogable ámbito del poder de representación de los administradores que prevé la propia Ley en tutela de terceros²⁰. Esta aplicación de las reglas sobre el ámbito del poder

CHINER, N., «Distribución y conflictos de competencias en la sociedad anónima no cotizada», en EMBID IRUJO, J. M. (coord.), *Las competencias de los órganos sociales en las sociedades de capital*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2005, pág. 76; RECALDE CASTELLS, A., comentario al «Artículo 161. Intervención de la junta general en asuntos de gestión», en JUSTE MENCÍA (coord.), *cit.*, págs. 54 y ss.

¹⁹ En alusión a la Ley de sociedades de responsabilidad limitada de 1995, ESTEBAN VELASCO, G., «Acuerdos de la Junta general de socios de la sociedad limitada en los asuntos de gestión y la responsabilidad de los administradores», *RdS*, núm. 18, 2002, págs. 223–224; SÁNCHEZ CALERO, F., *La junta general en las sociedades de capital*, Navarra, Thomson–Civitas, 2007, pág. 459; BOQUERA MATARREDONDA y LATORRE CHINER, *op. cit.*, págs. 82–83. Anteriormente, *vid.* GIRÓN TENA, *Derecho...*, *op. cit.*, págs. 358 y ss., en especial ahora pág. 361. En referencia actual y concreta a la reforma ahora comentada, RECALDE CASTELLS, «Artículo 161. Intervención de la junta general en asuntos de gestión» *op. cit.*, págs. 58–59.

²⁰ *Vid.* el art. 161 LSC, que declara aplicable en todo caso el ámbito del poder de representación previsto por el art. 234 LSC, al que se remite. Entre las enmiendas al Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo de 30 de mayo de 2014, el Grupo Parlamentario La Izquierda Plural propuso que la nueva redacción del art. 161 LSC dejara constancia de que «Dichas instrucciones, autorizaciones o acuerdos deberán ser seguidos por el órgano de administración» (enmienda núm. 23), con la finalidad de reforzar los poderes de la junta para el control de la administración; sin embargo, no sugirió alteración del art. 236.2 LSC sobre la no exoneración de los administradores a pesar de mediar acuerdo de la junta acordando, autorizando o ratificando el acto lesivo, que es la regla que en Derecho español compone el alcance del deber de ejecución por los administradores de los acuerdos de la junta, en el que no nos podemos detener ahora; véase QUIJANO GONZÁLEZ, J., *La responsabilidad civil de los administradores de la sociedad anónima (Aspectos sustantivos)*, Valladolid, Publicaciones Universidad de Valladolid, 1985, págs. 172 y ss. y 273; ESTEBAN VELASCO, «Acuerdos de la Junta general...», *op. cit.*, págs. 223 y

de representación debe tenerse presente no sólo en los casos de intervención de la junta en materia de gestión por propia iniciativa, sino también si esa competencia en materia de gestión proviene de una habilitación estatutaria o tras el sometimiento del asunto concreto por los administradores. De este modo, en aplicación del indisponible ámbito del poder de representación previsto por la Ley, si el órgano de administración actúa de forma diversa a lo predispuesto por la junta en ejercicio de la competencia que tenga atribuida por estatutos, por sumisión por los administradores, o por asunción de competencia, no afecta en absoluto a la validez y eficacia del acto de representación de la sociedad frente a terceros de buena fe. Con independencia de su origen y de la forma que revistan, cualquier limitación voluntaria al ámbito legal del poder de representación es inoponible frente a tales terceros, y tanto las previsiones estatutarias atribuyendo a la junta competencia en materia de gestión como los acuerdos de este órgano relativos a la gestión sin una previa habilitación estatutaria –por sometimiento de los administradores o por iniciativa de la junta– son limitaciones voluntarias²¹.

227 y ss.; o PUYOL MARTÍNEZ-FERRANDO, B., «La exoneración de responsabilidad de los administradores de sociedades por intervención de la junta general», en AA.VV., *Estudios de Derecho de Sociedades y Derecho Concursal. Libro homenaje al Profesor Rafael García Villaverde*, Tomo II, Marcial Pons, Madrid, 2007, *passim*, especialmente págs. 1030 y ss. Por su parte, el Grupo Parlamentario Socialista, en una proposición de escasa enjundia, sugería una eliminación de la remisión por el art. 161 al art. 234 LSC, dejando en aquél simplemente la afirmación de que «Los actos realizados por los administradores infringiendo las instrucciones impartidas por la junta serán válidos frente a terceros» (enmienda núm. 65); lo cierto es que resulta preferible declarar la validez de lo actuado frente a terceros a través de una remisión al régimen completo previsto en el art. 234, como hacía la LSC antes de la reforma y mantuvo la norma finalmente aprobada.

²¹ Art. 234.1 LSC. ESTEBAN VELASCO, G., comentario al «Artículo 234. Ámbito del poder de representación», en ROJO y BELTRÁN (coords.), *op. cit.*, pág. 1684, señala que entre las limitaciones voluntarias «se encuentran las estatutarias, en las que la realización de determinados actos se confía a otro órgano o simplemente se somete a su previa autorización, así como las que resultan de acuerdos adoptados por órganos competentes, que disponen la aprobación o autorización previa o imparten instrucciones». Debe añadirse que el art. 234.1 LSC no requiere expresamente buena fe en el tercero para que la limitación voluntaria interna al poder de representación sea inoponible por la sociedad, pero no parece justificable conceder tutela al tercero de mala fe, recayendo eso sí en la sociedad la carga de la prueba de que el tercero conocía dicha limitación y la consecuente vulneración por el órgano de administración, ESTEBAN VELASCO, *op. loc. ult. cit.* En este sentido también se pronuncia el Anteproyecto de Ley de Código Mercantil de 30 de mayo de 2014, en cuyo art. 215-3 señala que «Cualquier limitación del poder de representación de los administradores, aunque se halle inscrita en el Registro Mercantil, será ineficaz frente a terceros» –párrafo 2–, añadiendo a continuación que «En ningún caso quedará obligada la sociedad con los terceros que hubieran actuado en fraude o con mala fe en perjuicio de la sociedad» –párrafo 3–, en un texto que proviene de la Propuesta de Código

B. El poder de representación en operaciones con activos esenciales

Como vemos, la Ley se muestra clara en lo referido a las consecuencias sobre el poder de representación de los administradores de la atribución voluntaria de competencia a la junta en materia de gestión, ya sea vía estatutos, o por iniciativa de cualquiera de los dos órganos –en su condición de limitaciones voluntarias del poder–. Esa opción del legislador contrasta con la falta de claridad para los casos de atribución legal de competencia en materia de gestión, como se entiende la nueva competencia de la junta general que ahora tratamos.

En efecto, la previsión de esta nueva competencia a favor de la junta general precisa de aclaración en cuanto a las consecuencias de la realización por parte de los administradores de tales actos sin el preceptivo acuerdo previo de la junta, usurpando la competencia de ésta, en lo referido a la eventual validez y eficacia de dichos actos de gestión y representación. La atribución de competencia a la junta general sobre la disposición y adquisición de activos esenciales de la sociedad supone, en definitiva, el reconocimiento *ex lege* de que tales actos exceden de la competencia propia de los administradores y consecuentemente del ámbito de su poder de representación. En estos casos, podría dudarse si deben aplicarse las reglas previstas en la LSC para los casos de realización de actos *ultra vires* por los administradores, actos que exceden el objeto social y por tanto suponen una extralimitación de los administradores en el ámbito de su poder de

de Sociedades Mercantiles de 2002 –art. 34–. En Derecho comparado, igualmente el art. 2384, párrafo segundo, del *Codice Civile* italiano se muestra meridianamente claro en este sentido, en sede de sociedad anónima: «las limitaciones a los poderes de los administradores que resulten de los estatutos o de una decisión de los órganos competentes no son oponibles a los terceros, incluso si fueran publicadas, salvo que se pruebe que éstos han actuado intencionadamente en daño de la sociedad», con un grado muy destacado de tutela del tercero al ser necesario probar dolo; en términos equivalentes se pronuncia el art. 2475bis del *Codice Civile* en referencia a la sociedad de responsabilidad limitada, aludiendo a las limitaciones estatutarias o derivadas del acto de nombramiento. En sentido similar, aunque con menor tutela del tercero al ser suficiente demostrar su negligencia para la oponibilidad, el *Código das Sociedades Comerciais* portugués alude expresamente a la necesidad de probar que el tercero conocía la limitación voluntaria o no la podía ignorar, sin admitirse la prueba por la mera previsión estatutaria y su correspondiente inscripción, arts. 409 y 260, referidos respectivamente a sociedades anónimas y a sociedades limitadas.

representación. Pero en realidad ha de descartarse la aplicación de tales reglas en estos casos, pues la amplitud e inderogabilidad del ámbito del poder de representación de los administradores se predica únicamente en las actuaciones comprendidas dentro de su competencia legal que no invadan la de otros órganos ni se trate de actos prohibidos. La diferencia de régimen no es irrelevante, pues en el primer caso la sociedad respondería de dichos actos frente a terceros de buena fe y sin culpa grave, que en este punto serían aquellos terceros que desconocían que el objeto del negocio celebrado constituía un activo esencial para la sociedad y no lo hubieran podido conocer empleando un mínima diligencia; mientras que en el segundo, frente a una adquisición o disposición de activos esenciales por los administradores sin el previo acuerdo favorable de la junta general, la sociedad podrá oponer frente a terceros la invalidez de lo actuado por los administradores excediendo su competencia legal, pues los administradores sólo pueden obligar a la sociedad por actos en ejercicio de sus competencias legales, pertenezcan o no al objeto social, respetando la distribución legal interorgánica de competencias²². Las reglas relativas al ámbito del poder de representación sólo tienen aplicación dentro de esos límites competenciales que la Ley atribuye al órgano de administración, pues fuera de ellos directamente no existe capacidad de representar a la sociedad²³. Eso sí,

²² Ya declaraba GIRÓN TENA, *Derecho...*, *op. cit.*, pág. 362, que «la ilimitación de poderes de los administradores, frente a terceros, encuentra su límite en la esfera de legalidad de la configuración de esos poderes». A este respecto, bajo la influencia histórica de lo previsto por el art. 9 de la Primera Directiva 68/151/CEE, que inspiró la regulación española, véase ESTEBAN VELASCO, G., «La representación de la sociedad frente a terceros», en GIRÓN TENA, J. (dir.), *Estudios y textos de derecho de sociedades de la Comunidad Económica Europea*, Madrid, Sección de Publicaciones e Intercambio de la Universidad de Madrid, Facultad de Derecho, 1978, págs. 322–323: «pese a la ausencia de un criterio legal expreso (...), el poder de representación sólo queda limitado por aquellas disposiciones legales que de forma exclusiva e insustraíble atribuyen la adopción del acuerdo a otro órgano, de forma que sin la intervención de ese otro órgano la sociedad no queda vinculada eficazmente frente a terceros. Y, por consiguiente, dejando a salvo lo que luego se dirá sobre el objeto social, el poder de representación, en cuanto determinado por la ley, abarca la realización de todos los actos que la ley permite atribuir al órgano de representación» (notas al pie omitidas); más recientemente, el mismo autor, «Artículo 234...», *op. cit.*, págs. 1683–1684. También en tal sentido POLO SÁNCHEZ, E., *Los administradores y el consejo de administración de la sociedad anónima: (artículos 123 a 143 de la Ley de Sociedades Anónimas)*, Madrid, Civitas, 1992, págs. 167–169; y SÁNCHEZ CALERO, *Los administradores...*, *op. cit.*, 2007, págs. 247–249.

²³ ESTEBAN VELASCO, *op. loc. ult. cit.*: «los límites legales de competencia del órgano administrativo son oponibles frente a terceros. A la luz de esta disposición adquiere un nuevo relieve el problema de la delimitación de las facultades mínimas imperativas de la junta general. En todos aquellos supuestos que se refieren a la estructura y organización económica y jurídica, que técnicamente escapan a la noción de administración, así como

parece oportuno que el asunto sobre el que se declara la competencia de otro órgano esté expresamente determinado en la Ley y no simplemente de una forma genérica, de modo que los terceros puedan conocer el límite del poder de representación sin acudir a la publicidad registral ni realizar otro tipo de indagaciones al respecto²⁴. Pues, en definitiva, no debe olvidarse que la intención de la Ley al establecer con destacada amplitud el ámbito del poder de representación es tutelar al tercero en relación a la facilidad de conocimiento de los límites sobre la facultad de obligar a la sociedad de los administradores²⁵.

Sin embargo, esta nueva atribución legal de competencia a la junta general presenta un problema de claridad evidente, pues recae sobre operaciones que, según los casos, están ciertamente cercanas a la gestión extraordinaria o cuando menos a los actos neutros o polivalentes; pero no deben comprenderse en ninguna de esas categorías, por su desconexión manifiesta con la promoción del objeto social²⁶. Esa cercanía relativa, con el empleo además de un concepto jurídico indeterminado en su delimitación –

en todos aquellos en que el legislador establece una reserva legal expresa de competencia para la junta general, la sociedad no queda válidamente vinculada sin su intervención». También alude a la extralimitación del poder de representación por exceder la competencia legal de los administradores la RDGRN de 13 de febrero de 2012: «Dentro de los actos contrarios al objeto social se encuentran los genuinamente contrarios y los actos no tanto contrarios al objeto, sino que exceden de la competencia legal de los administradores», aunque en concreto no distingue el régimen aplicable en las relaciones externas.

²⁴ POLO SÁNCHEZ, *Los administradores...*, *op. cit.*, pág. 168.

²⁵ El Anteproyecto de Ley de Código Mercantil de 30 de mayo de 2014, en una redacción prácticamente idéntica al art. 34 de la olvidada Propuesta de Código de Sociedades Mercantiles de 2002, previó en este sentido una regulación del ámbito del poder de representación de los administradores más correcta en sus términos, dejando claro el límite que supone la competencia legal de otro órgano de cara a la oponibilidad por la sociedad frente a terceros: «Los actos realizados en nombre de la sociedad por los administradores con poder de representación, estén o no incluidos dentro del objeto social, obligan a la sociedad frente a los terceros, a menos que este Código atribuya esos actos a la competencia de otro órgano social» –art. 215–3.1 de dicho Anteproyecto–.

²⁶ Apunta RECALDE CASTELLS, «Artículo 160. Competencia de la junta», *op. cit.*, pág. 46, que «el poder de los administradores nunca es para actos extraños al objeto social (artículo 234.1 LSC), ni para los que imposibilitan su realización, conducen a la disolución de la sociedad o cuyos efectos son asimilables a los de una modificación estructural. En estos casos la competencia es de la junta». En la misma línea ALFARO ÁGUILA-REAL, J., «El nuevo artículo 160 f) LSC», entrada de su blog con fecha 13 febrero 2015, disponible en <http://derechomercantilesparana.blogspot.com.es> (con acceso el 10/09/2015), apuntando que el art. 234.2 LSC sólo dice que «la publicidad positiva del registro (la cláusula de objeto social inscrita) no perjudica al tercero. Pero no dice que sea la misma la consecuencia cuando es el legislador el que delimita lo que constituye el desarrollo del “objeto social”».

los activos han de ser “esenciales”–, no facilita en absoluto el conocimiento por el tercero de si en el caso concreto se enfrenta a un acto comprendido en el poder de representación o excluido de éste por exceso de competencia legal, es decir, sin capacidad de obligar a la persona jurídica²⁷; ni siquiera el elemento objetivo que cuantifica el carácter esencial del activo –superar el veinticinco por cien del valor de los activos sociales– aporta seguridad jurídica al tercero implicado en el eventual negocio conflictivo. E incluso aunque el administrador presente al tercero el último balance aprobado o un informe de experto independiente que evidencie que la adquisición o disposición de activos es cuantitativamente inferior al umbral legal que lo caracteriza como esencial, el tercero no tendrá seguridad plena sobre el ejercicio correcto por aquél del acto de representación, precisamente por la eventual condición esencial del activo desde un punto de vista cualitativo. En la práctica notarial y registral se arbitrarán mecanismos de control de mayor o menor eficacia sobre el carácter esencial o no del activo afectado por el negocio que vaya a escriturarse o inscribirse –una declaración jurada del administrador indicando que el activo no es esencial, la exhibición de documentos contables, etcétera²⁸. Pero ciertamente será el juez quien aporte la solución a esta cuestión problemática en caso de que la controversia acabe en los Tribunales, y nos parece difícil que admita esa inobservancia del límite legal de la competencia de los administradores sin una mención de la propia Ley introduciendo tal salvedad, al contrario de lo que dispone la propia LSC respecto a la atribución voluntaria de competencia de gestión a la junta²⁹. Entendemos por tanto que, ante el silencio de la

²⁷ ALFARO ÁGUILA-REAL, J., «El nuevo artículo 160 f) LSC», *op. cit.*, «(...) la Ley pone sobre los terceros la carga de asegurarse de que los administradores actúan dentro de sus competencias legales y, por tanto, comprobar si se trata de un activo esencial y exigir, en tal caso, la exhibición del acuerdo de la junta».

²⁸ Sobre esa práctica notarial y registral, CABANAS TREJO, *op. cit.*, págs. 14–15; ÁLVAREZ ROYO-VILLANOVA y SÁNCHEZ SANTIAGO, *op. cit.*, págs. 22–27. Todavía más reciente y de gran relevancia, *vid.* también los pronunciamientos de la DGRN en las resoluciones de 11 de junio (ref. BOE-A-2015-8957), tres de 26 de junio (ref. BOE-A-2015-9006, A-2015-9007 y A-2015-9069), 8 y 11 de julio de 2015 (ref. BOE-A-2015-9091, y A-2015-9119), que entienden suficiente la manifestación del órgano de administración refiriendo el carácter no esencial del activo desde una perspectiva cualitativa y cuantitativa, ésta última bajo indicación de que el importe del negocio es inferior al veinticinco por ciento del valor de los activos en el último balance aprobado, y por tanto no activa la presunción legal.

²⁹ Como hemos visto *supra* notas 20 y 21 y texto que acompañan, en referencia a la remisión del art. 161 al art. 234 LSC, declarando indirectamente aplicable las reglas de las

norma, no es prudente aplicar la consecuencia prevista para las limitaciones voluntarias a la limitación legal de competencia³⁰. Si bien, comoquiera que puede resultar problemática la delimitación de la competencia legal de la junta general en asuntos de gestión que impliquen activos esenciales respecto a la competencia (también legal) del órgano de administración sobre la gestión, no sólo con efectos internos sino (sobre todo) en perjuicio de terceros de buena fe, sería conveniente reconocer expresamente en la norma que a tales actos se les aplican las normas relativas al exceso del ámbito del poder de representación, de manera que para su oponibilidad por la sociedad ésta debiera demostrar la mala fe del tercero o su culpa grave³¹.

limitaciones internas al ámbito del poder de representación en los casos atribución voluntaria de competencia de gestión a la junta.

³⁰ *Vid.* no obstante las recientes RRDGRN citadas *supra* en la nota 28, que en relación a la eficacia externa del acto de los administradores sin acuerdo de la junta general cuando éste sea preceptivo por tratarse de un activo esencial, se posicionan *obiter dicta* y declaran la aplicación analógica del art. 234.2 LSC. Sobre dichas RRDGRN, léase la crítica de RECALDE CASTELS, A., «La DGRN no resuelve sobre la transmisión de activos esenciales», entrada del blog *Almacén de Derecho*, de fecha 18 agosto 2015, disponible en <http://almacendederecho.org> (con acceso el 10/09/2105), que mantiene su postura: «la ley delimita las competencias de los órganos sociales, acotando capacidad y poder de representación, por lo que el art. 234.2 LSC no es aplicable».

³¹ Es decir, entendemos que la remisión realizada por el art. 161 al 234 LSC, que indirectamente declara aplicable las reglas de las limitaciones internas al ámbito del poder de representación en los casos atribución voluntaria de competencia de gestión a la junta, sería deseable en términos similares en el tenor de la nueva letra f) del art. 160 LSC, en tutela del tercero de buena fe y sin culpa grave; y mientras no se introduzca una previsión de este tipo, la sociedad puede oponer el exceso de competencia (legal) frente al tercero. Se pronuncia con meridiana claridad RECALDE CASTELS, «Artículo 160. Competencia de la junta», *op. cit.*, págs. 43-47: «la norma altera el régimen legal que regula la toma de decisiones en determinados negocios de disposición, requiriendo un acuerdo positivo de la junta como requisito para su validez. No se ocupa de un problema que afecte al poder de representación, sino que fija la capacidad de la sociedad en relación con operaciones tan relevantes, que exceden claramente de la gestión ordinaria que delimita el objeto social, y fija cuál es el órgano competente que debe actuar. Si la ley establece una reserva legal de competencia a favor de la junta, la sociedad no queda vinculada sin su intervención»; así también ALFARO ÁGUILA-REAL, «El nuevo artículo 160 f) LSC», *op. cit.*: «En el caso del art. 160 f) LSC estamos ante un caso de “exceso de poder” que no se sana por el art. 234.2 LSC»; *id.*, «Y más sobre el art. 160 f) LSC», entrada de su blog de fecha 2 junio 2015, disponible en <http://derechomercantiles.es> (con acceso el 10/09/2015); y MARÍN DE LA BARCENA GARCIMARTÍN, «Nuevas competencias...», *op. cit.*, pág. 47. En contra FERNÁNDEZ DEL POZO, *op. cit.*, págs. 28-29: «la extralimitación de competencia no puede hacerse valer contra el tercero de buena fe que contrata con la sociedad. No existe una carga del tercero de averiguar el importe del activo o de consultar las últimas cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil. Solamente cuando el tercero es cómplice del fraude de la regla de competencia o cuando la extralimitación competencial es manifiesta y su desconocimiento inexcusable en atención a las circunstancias que concurren en el caso (pensemos en la venta de la totalidad del patrimonio social) la extralimitación podrá oponerse a tercero. El estándar aplicable al tercero de buena fe es el que se infiere de la regla en que se recoge el ámbito legal predeterminado e ilimitable de las facultades representativas de los administradores: cfr.

BIBLIOGRAFÍA

- ALFARO ÁGUILA-REAL, J., «Y más sobre el art. 160 f) LSC», entrada de su blog con fecha 2 junio 2015, disponible en <http://derechomercantiles pana.blogspot.com.es/> (con acceso el 10/09/2015).
 - «El nuevo artículo 160 f) LSC», entrada de su blog con fecha 13 febrero 2015, disponible en <http://derechomercantiles pana.blogspot.com.es/> (con acceso el 10/09/2015).
 - «Competencias de la Junta e instrucciones a los administradores (II)», entrada de su blog con fecha 18 junio 2014, disponible en <http://derechomercantiles pana.blogspot.com.es/> (con acceso el 10/09/2015).
- ALONSO LEDESMA, C., «El papel de la Junta General en el gobierno corporativo de las sociedades de capital», en ESTEBAN VELASCO, G., (coord.), *El gobierno de las sociedades cotizadas*, Madrid, Marcial Pons, 1999, págs. 615 a 664.
- ÁLVAREZ ROYO-VILLANOVA, S., «La aportación de rama de actividad tras la regulación de la segregación en la Ley 3/2009 de Modificaciones Estructurales», en *Diario La Ley*, núm. 7253, 1 octubre 2009.
- ÁLVAREZ ROYO-VILLANOVA, S., y SÁNCHEZ SANTIAGO, J., «La nueva competencia de la junta general sobre activos esenciales: a vueltas con el artículo 160 f) LSC», en *Diario La Ley*, núm. 8546, 25 mayo 2015.
- BOQUERA MATARREDONDA, J., *La Junta General de las Sociedades de Capital*, Cizur Menor, Aranzadi, 2008.

art. 234 LSC al que, por cierto, se remite, en materia de injerencia de la junta en la gestión el art. 161 LSC». También en contra CABANAS TREJO, *op. cit.*, si bien en un principio parece admitir la incapacidad del órgano de administración de obligar a la sociedad invadiendo la competencia legal de la junta –pág. 11–, se decanta por entender aplicable el art. 234 LSC también para el caso de la disposición o adquisición de activos esenciales –págs. 13–14–. Y ÁLVAREZ ROYO-VILLANOVA y SÁNCHEZ SANTIAGO, *op. cit.*, pág. 19, «existe una clara laguna legal en esta cuestión, pues la ley no contempla cual es el efecto de no obtener la autorización de la JG», concluyendo a continuación que «entendemos que existe una laguna legal e identidad de razón que permite la aplicación analógica del art. 234 LSC a este supuesto, por ser lo más adecuado no solo al conjunto de nuestro sistema sino también a la normativa comunitaria» –pág. 21–.

- BOQUERA MATARREDONDA, J., y LATORRE CHINER, N., «Distribución y conflictos de competencias en la sociedad anónima no cotizada», en EMBID IRUJO, J. M. (coord.), *Las competencias de los órganos sociales en las sociedades de capital*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2005, págs. 29 a 99.
- CABANAS TREJO, R., « Activos esenciales y competencia de la junta general de las sociedades de capital ¿un riesgo para el tercero que contrata con la sociedad?, en *Diario La Ley*, núm. 8521, 17 abril 2015.
- ESTEBAN VELASCO, G., comentario al «Artículo 161. Intervención de la junta general en asuntos de gestión», en ROJO, A., y BELTRÁN, E. (coords.), *Comentario de la ley de sociedades de capital*, Madrid, Civitas–Thomson Reuters, 2011, págs. 1209 a 1217.
 - Comentario al «Artículo 234. Ámbito del poder de representación», en ROJO, A., y BELTRÁN, E. (coords.), *Comentario de la ley de sociedades de capital*, Madrid, Civitas–Thomson Reuters, 2011, págs. 1682 a 1688.
 - «Acuerdos de la Junta general de socios de la sociedad limitada en los asuntos de gestión y la responsabilidad de los administradores», *RdS*, núm. 18, 2002, págs. 217 y ss.
 - «La representación de la sociedad frente a terceros», en GIRÓN TENA, J. (dir.), *Estudios y textos de derecho de sociedades de la Comunidad Económica Europea*, Madrid, Sección de Publicaciones e Intercambio de la Universidad de Madrid, Facultad de Derecho, 1978, págs. 253 a 333.
 - *El poder de decisión en las sociedades anónimas: derecho europeo y reforma del derecho español*, Madrid, 1982.
- FERNÁNDEZ DEL POZO, L., «Aproximación a la categoría de “operaciones sobre activos esenciales”, cuya decisión es competencia exclusiva de la Junta [arts. 160 f) y 511 bis LSC]», en *La Ley Mercantil*, núm. 11 (febrero), 2015, págs. 24 a 48.
- FERNÁNDEZ TORRES, I., «La reactivación de la Junta General en el Código Unificado de Gobierno Corporativo: aproximación a las competencias implícitas», en *EPrints Complutense*, núm. 11, 2007.
- GIRÓN TENA, J., *Derecho de sociedades anónimas (según la Ley de 17 de julio de 1951)*, Valladolid, Publicaciones de los Seminarios de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid, 1952.

- MARÍN DE LA BÁRCENA GARCIMARTÍN, F., «Nuevas competencias expresas de la junta general de las sociedades de capital», en AA.VV., *Las reformas del régimen de sociedades de capital según la Ley 31/2014*, Gómez-Acebo & Pombo. Gestión del Conocimiento, 2015, págs. 45 a 47. Disponible desde Internet en <http://www.gomezacebo-pombo.com> (con acceso 10/09/2015).
- POLO SÁNCHEZ, E., *Los administradores y el consejo de administración de la sociedad anónima: (artículos 123 a 143 de la Ley de Sociedades Anónimas)*, Madrid, Civitas, 1992.
- PUYOL MARTÍNEZ-FERRANDO, B., «La exoneración de responsabilidad de los administradores de sociedades por intervención de la junta general», en AA.VV., *Estudios de Derecho de Sociedades y Derecho Concursal. Libro homenaje al Profesor Rafael García Villaverde*, Tomo II, Marcial Pons, Madrid, 2007, págs. 1021 a 1058.
- QUIJANO GONZÁLEZ, J., *La responsabilidad civil de los administradores de la sociedad anónima (Aspectos sustantivos)*, Valladolid, Publicaciones Universidad de Valladolid, 1985.
- RECALDE CASTELS, A., «La DGRN no resuelve sobre la transmisión de activos esenciales», entrada del blog *Almacén de Derecho*, de fecha 18 agosto 2015, disponible en <http://almacenedderecho.org> (con acceso el 31/08/2105).
 - Comentario al «Artículo 160. Competencia de la junta», en JUSTE MENCÍA, J. (coord.), *Comentario a la reforma del régimen de las sociedades de capital en materia de gobierno corporativo (Ley 31/2014). Sociedades no cotizadas*, Cizur Menor, Aranzadi, 2015, págs. 29 a 50.
 - Comentario al «Artículo 161. Intervención de la junta general en asuntos de gestión», en JUSTE MENCÍA, J. (coord.), *Comentario a la reforma del régimen de las sociedades de capital en materia de gobierno corporativo (Ley 31/2014). Sociedades no cotizadas*, Cizur Menor, Aranzadi, 2015, págs. 51 a 63.
- RODRÍGUEZ ARTIGAS, F., «Escisión parcial, segregación y aportación de rama de actividad», en *Anales de la Academia Matritense del Notariado*, núm. 50, 2010, págs. 443 a 461.

- «Junta General y derechos del accionista», en *RdS*, núm 27, 2006, págs. 31 a 63.
- SÁNCHEZ CALERO, F., *Los administradores en las sociedades de capital*, 2ª ed., Cizur Menor, Thomson-Civitas, 2007.
- *La junta general en las sociedades de capital*, Navarra, Thomson-Civitas, 2007.